

Albores y proceso de la Revolución Mexicana

John Hart

El largo desarrollo del conflicto social mexicano que condujo hacia la revolución de 1910 comenzó a finales del siglo XVII. Durante unos doscientos años, un proceso creciente de expansión de los latifundios agrícolas comerciales y de la industria —propiedades metropolitanas y controladas desde el exterior— desestabilizó progresivamente las sociedades locales. La competencia resultante por los derechos de las tierras y el agua con frecuencia llevó a las revueltas campesinas. En muchos casos los pueblos indígenas rurales habían experimentado periodos prolongados de relativo aislamiento autónomo y de estabilidad social antes del advenimiento de los intrusos que alteró su vida económica, política y social.

La llegada y el proceso de la Revolución Mexicana

Durante la mayor parte del periodo colonial, la participación en los beneficios engendró un interés común entre las élites de las provincias y de la metrópoli frente a las clases trabajadoras indígenas y mestizas. Como resultado, el liderazgo de casi todos los levantamientos regionales de la Nueva España se derivó de los elementos de lo que quedaba de los pueblos indígenas y de las élites locales, no de los terratenientes provinciales ni de los representantes del poder político con un status relativamente alto. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, el crecimiento de la agri-

cultura comercial y de la minería, controlado desde la metrópoli, y la extensión del poder del estado, provocaron inquietud entre las élites políticas provinciales y locales. Este fuerte grupo demostró su capacidad política al reunir de su lado a las clases desplazadas y a las castas, al campesino del pueblo y a los artesanos, indios, negros y mestizos.

Entre 1810 y 1876, las élites regionales y locales usaron con frecuencia las milicias de sus respectivos territorios para defender la integridad de sus privilegios económicos y políticos en contra de los fuereños. Los propietarios ausentes en la ciudad de México y en las capitales de provincia buscaban ganancias por medio de la agricultura de exportación en el centro, sur y extremo norte. La expansión de sus empresas y la intervención de los mayordomos de sus propiedades desafiaban las prerrogativas de los pueblos comunales y de las autoridades de regiones locales.

Mientras tanto, la inserción creciente de México en la economía mundial significaba mayor competencia del exterior para la industria doméstica. La expansión gradual del comercio y el influjo de bienes de tecnología desarrollada lesionaban al artesano local. La dislocación agrícola e industrial creó un amplio sentido de inconformidad pública, dándole a las élites regionales la base popular que necesitaron para las incontables insurrecciones y las exitosas revoluciones políticas de 1853-54 y 1876.

El proceso de penetración económica que condujo a rebeliones regionales multiclasistas y de castas que resultaron —y que caracterizaron a la revolución de 1910— comenzó cuando la agricultura latifundista comercial hizo grandes avances en la región de Chiapas-Istmo de Tehuantepec a finales del siglo XVII. Los propietarios ausentes en la ciudad de México controlaban un nuevo complejo de productos agrícolas industriales para la exportación: tabaco, algodón, azúcar, cáñamo y cacao. El latifundio en cuestión, la enorme y expansiva hacienda Marquesana, había sido parte del Marquesado del Valle que dejó en herencia Hernán Cortés. El problema empezó cuando los dueños de la hacienda se apropiaron de las tierras que reclamaban para sí los pueblos zapotecas del Istmo. Algunas élites locales, comerciantes, compradores, personal administrativo y funcionarios entre los que estaban los caciques, se beneficiaban con el desarrollo de los latifundios comerciales orientados hacia la exportación, aunque algunos no. El resultado fue un cambio en el equilibrio del poder en las jerarquías políticas y económicas locales. El conflicto surgió entre las que estaban más estrechamente asociadas con la todavía intacta sociedad campesina indígena zapoteca y los beneficiarios y participantes del orden nuevo. A partir de 1707, una década de violencia afianzada en un conflicto político, económico y cultural cada vez más profundo, barrió la región de Chiapas-Tehuantepec asumiendo la forma de levantamientos en los pueblos y "guerras indígenas". Las élites locales desplazadas, los mestizos y campesinos de los pueblos y los trabajadores de las propiedades rurales formaron el núcleo del descontento.

En 1780, cerca del pueblo de Izúcar en el actual estado de Puebla, brotó nueva violencia. La introducción reciente de la producción comercial de azúcar a gran escala había transformado

la tenencia de la tierra en la zona. Mientras los propietarios residían en la ciudad de México, sus representantes locales antagonizaban a la jerarquía política tradicional, las tradiciones culturales indígenas y la economía campesina de la zona. El choque entre los terratenientes y los antiguos campesinos comunales asumió un tono moderno cuando estos últimos se quejaron de los "raquíticos salarios". La rebelión de Izúcar estaba constituida por una alianza de rebeldes multiclasistas y de castas, quienes lucharon por restaurar la autonomía de los pueblos, la autoridad política regional, las tierras usurpadas al pueblo y para ganar mejores salarios por su trabajo, tanto de tiempo parcial como de tiempo completo en las haciendas.

De un modo similar, la revolución de independencia de 1810 en el Bajío fue resultado de la desestabilización social de la región, consecuencia de los aumentos masivos —seguidos por descensos erráticos— en la minería y en la agricultura comercial durante el siglo XVIII. El auge minero estimuló el desarrollo de haciendas agrícolas de apoyo en la región. Sin embargo, un siglo de prosperidad terminó con una depresión económica severa entre 1800 y 1810. Esa crisis, a la que caracterizaron el desempleo industrial y la caída de la producción de la plata, exacerbó los viejos problemas de la región, relativos al despojo campesino y la hambruna endémica. La alianza revolucionaria que se dio en un Bajío golpeado por la crisis fue un corte transversal multiclasista y de castas de la sociedad provincial. Incluía funcionarios políticos, dueños de fábricas, tenderos, curas de pueblo, campesinos despojados, mineros sin empleo y "gente del pueblo" de las rancherías que se sentía víctima de usurpación de tierras por parte de los latifundios.

La élite criolla local guió a las principales fuer-

zas revolucionarias mientras que grupos más pequeños exhibieron un liderazgo de mulatos, mestizos, indios de los pueblos y agricultores. Conforme la revolución se extendió hacia el sur —por lo que hoy son los estados de Michoacán, Guerrero y Morelos— ésta asumió aspectos contrastantes. Durante los siguientes años, una clase profesional —la pequeña burguesía— y el liderazgo ranchero o del mediano propietario caracterizaron a las fuerzas principales. Sin embargo, en la campiña, los trabajadores de los pueblos y del campo realizaron un contraataque más generalizado contra la agricultura comercial controlada desde fuera y contra la interferencia política.

Entre 1832 y 1854, el descontento rural continuó con tres grandes levantamientos regionales que arrasaron el área de las 60,000 millas cuadradas que están entre la región altamente comercializada de Tehuantepec en el sur y las nuevas zonas productoras de cítricos de la cuenca del río Balsas en Michoacán y los centros azucareros de Morelos e Izúcar, Puebla, hacia el norte. La tercera revuelta, la de 1853-54, alcanzó una dimensión nacional y resultó en el derrocamiento del presidente Antonio López de Santa Anna y en su sustitución por el hombre fuerte de la provincia del suroeste, Juan Alvarez.

La agricultura comercial creció rápidamente durante el siglo XVIII y el suroeste fue uno de sus puntos focales. El despojo campesino asociado con el crecimiento de las haciendas avanzó rápidamente en las áreas de mayor desarrollo comercial. La hacienda Marquesana en el Istmo de Tehuantepec y la hacienda San Marcos localizada entre Acapulco y Oaxaca eran las más grandes de la zona. Esta última tenía 200,000 hectáreas de tamaño.

Durante las ofensivas campesinas de la lucha de independencia entre 1810 y 1821, las grandes propiedades en el suroeste sufrieron pérdidas gra-

ves, pero después que terminó la guerra con España empezaron a reconsolidarse. Los propietarios ausentes que residían en la lejana ciudad de México continuaron ejerciendo un poder considerable. Sus actividades amenazaron por un lado las aspiraciones de las élites criollas provincianas, quienes deseaban aumentar su papel de liderazgo, y por el otro, las tierras reclamadas por los campesinos de los pueblos. El caudillo regional Juan Alvarez y sus aliados de la élite provinciana del suroeste finalmente aprovecharon el perpetuo descontento de las clases bajas durante su exitosa campaña para hacerse del poder político nacional en 1854.

Muchos de los partidarios del Partido Liberal de Alvarez compartían el deseo de emular el éxito político y económico de Estados Unidos. Conscientes de la necesidad de una mejora material, ansiaban el capital y la tecnología del poder noratlántico para deshacer una sensación de derrota generada durante 40 años de caos desde 1810. En su entusiasmo algunos llevaron su visión al extremo de insinuar la asociación con la república del norte que aún crecía. Otros habrían dado la bienvenida a un protectorado. La mayoría buscaba una cooperación económica entre las dos naciones sin pensar en los riesgos. Cuando se logró, la íntima relación entre Estados Unidos y México se convirtió en un elemento crítico en el proceso de la revolución de 1910.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, las rebeliones campesinas y provincianas se desplazaron hacia el norte en asociación con el ferrocarril, la agricultura comercial y el desarrollo minero y maderero. Entre 1868-1883 se dieron importantes levantamientos campesinos y regionales en las áreas afectadas. Para la década de 1890 el esquema de intrusión y rebelión había llegado a Chihuahua, Sonora y Coahuila. Afectó a los pueblos mestizos gobernados por sí mismos y semi-

autónomos establecidos en otras épocas como presidios coloniales contra los indios bárbaros. Sin embargo, las élites regionales participaron sólo en unas cuantas luchas.

En 1876, Porfirio Díaz —un revoltoso caudillo provinciano del suroeste, Oaxaca— había reunido a las élites provincianas con la revolución de Tuxtepec. El levantamiento empezó en serio en enero de 1876 desde el cuartel general de Díaz en Brownsville, Texas. Apoyado abiertamente con dinero en efectivo y armas por importantes capitalistas norteamericanos, comandantes militares y terratenientes de Texas, Díaz pudo sostener su revolución durante seis meses a lo largo del Río Bravo entre Laredo —Nuevo Laredo y Brownsville— y Matamoros. Para el mes de junio, algunos gobernadores estatales y comandantes de destacamentos en provincia se habían sumado al levantamiento para derrocar al gobierno desestabilizado y “antinorteamericano” del presidente Sebastián Lerdo de Tejada.

Durante los primeros años de su periodo, el nuevo régimen de Díaz creó una amplia base de apoyo nacional. Entre sus partidarios se incluían representantes de las oligarquías de los estados. Evaristo Madero, de Coahuila, era uno de ellos. Ellos participaron en un programa de expansión económica dominado por capitalistas norteamericanos y europeos. Dominantes ahora en la política y en contacto directo con los mercados exteriores por vía del crecimiento de los ferrocarriles y de las industrias extractivas, los oligarcas norteños perdieron su autonomía política pero cayó sobre ellos una riqueza repentina. Las luchas contra el ejército que se dieron durante esta época involucraron en su mayor parte a los pueblos campesinos que sufrían despojos de tierras debido al deslinde de terrenos. Los conflictos tuvieron lugar aislados de los estratos superiores de la sociedad provinciana.

Sin embargo, para 1900 el gobierno nacional había centralizado la autoridad política hasta un extremo sin precedente al mismo tiempo que los lazos cada vez más fuertes entre el régimen y el capital extranjero habían resultado en un flujo de colonos norteamericanos que reclamaban título de tierras y recursos mexicanos. Esa situación era muy aterradora en el norte, en donde las élites provincianas habían sido testigos de la pérdida de Texas en manos de colonos norteamericanos y de la apropiación económica de los territorios que más tarde se convirtieron en las entidades federativas del suroeste de Estados Unidos. Estos problemas, combinados con una crisis fiscal que redujo la capacidad del gobierno para suministrar servicios, provocó que las élites provincianas sintieran que se les estaba negando la oportunidad de participar en el crecimiento económico. Después de 1900, la penetración en la sociedad provinciana del comercio extranjero —penetración apoyada por el gobierno— alcanzó una magnitud sin precedentes, sobre todo en el extremo norte. Excluyó a las élites regionales y a menudo compitió con los terratenientes locales, los hombres de negocios y los artesanos. Para 1910, las propiedades norteamericanas en bienes raíces sumaban un total de 45,000,000 de hectáreas y abarcaban muchas de las propiedades mineras, agrícolas y madereras de mayor valor del país.

En tanto que el motor financiero del desarrollo capitalista del porfiriato era extranjero y no el producto de un proceso interno dinámico, los cada vez más numerosos centros de agricultura comercial y de actividad industrial se impusieron a una población aún predominantemente rural y campesina. El resultado fue una extraña yuxtaposición de sociedades contrastantes en el México rural. En cuatro áreas las fuerzas conflictivas de la penetración económica y de la sociedad tradi-



cional fueron especialmente fuertes. Estos lugares —Morelos en el centro-sur del país; Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche en la costa del Golfo y el Istmo de Tehuantepec, la costa del pacífico desde Sonora a Chiapas; y los estados fronterizos norteros de Coahuila y Chihuahua— se convirtieron en los puntos de partida de la Revolución Mexicana. Dos de ellos, el centro-sur y el extremo norte, se convirtieron en los puntos focales de una sostenida actividad revolucionaria dirigida por un liderazgo de las clases bajas.

En Morelos había una cohesión indígena, a diferencia de gran parte del norte, las costas del Golfo y las áreas más desarrolladas. Más del 20 por ciento de la población rural en 1910 seguía hablando el náhuatl únicamente, mientras que la mayoría era bilingüe. En contraste con la población campesina del país, que estaba distribuida de manera desigual, Morelos era la región rural de mayor densidad de población en México y su marcada estructura social de pueblos indígenas-mestizos se concentraba dentro de una de las zonas de agricultura comercial más intensas.

Treinta y ocho familias legendarias controlaban las haciendas y los ingenios azucareros del estado. Muchos de los propietarios ausentes residían en la ciudad de México, algunos eran extranjeros. La competencia entre las haciendas y los pueblos por tierras durante las décadas de 1880 y 1890 terminaron en victorias para los hacendados. Para 1910, ellos tenían casi el 98 por ciento de la tierra laborable. Muchos de los pueblos se enfrentaban a la posibilidad de extinción. A fin de aumentar la rentabilidad y la producción de azúcar, se construyeron dos líneas de ferrocarriles que conectaban el estado con la ciudad de México y con los centros de exportación de Veracruz y Acapulco. La persecución de objetivos económi-

cos también produjo un mejor sistema de caminos rurales en el país. Las carreteras cruzaron al estado poniendo en contacto inmediato a los poblados campesinos normalmente remotos y aislados. Las noticias se extendían con rapidez en Morelos y lo mismo pasó con los ejércitos guerrilleros de campesinos.

Ubicado a sólo 80 kilómetros de la ciudad de México, el campesinado morelense no sólo experimentó el impacto de los capitalistas metropolitanos y extranjeros, sino también la difusión de las ideas radicales europeas. El nacionalismo, el anarquismo y el liberalismo hallaron ahí un público receptivo. Zapata reconocía sus deudas a éstos en muchas de sus proclamas "al pueblo mexicano", a la vez que utilizaba los servicios de consejeros anarquistas de la organización obrera revolucionaria, la Casa del Obrero Mundial. Cercado por un círculo de escarpadas montañas impenetrables que abrazaban estrechamente a los campos fértiles abajo, Morelos se convirtió en el medio ideal para una guerra campesina prolongada. Su escabrosa topografía contrastaba fuertemente con la zona de rebelión de fácil acceso de la costa del Golfo y del Istmo de Tehuantepec, en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Guerrero.

A lo largo de las costas del Golfo y del Pacífico y en el Istmo de Tehuantepec, entre 1910 y 1911 empezó una revolución igualmente grande entre los trabajadores agrícolas de las haciendas, misma que se extendió de un modo incontrolable entre 1912 y 1916. Pero con anterioridad se había dado una fuerte comercialización y el régimen comunal que quedaba en algunos pueblos era débil. Sólo existía un número limitado de élites locales que tenían tierras en escala reducida para ofrecer a la insurrección un liderazgo cohesionador. En ambas costas se combinaron una población dispersa y la carencia de intactas jerarquías tradi-

cionales de los pueblos para negarle al descontento una base de apoyo sostenida. La costa del Golfo, plana y fácil de atravesar, ofreció las mayores oportunidades al ejército convencional e hizo difíciles, si no es que imposibles, las acciones guerrilleras. Las repetidas rebeliones en las zonas costeras del Golfo y del Pacífico fueron aplastadas por las fuerzas gubernamentales en 1913 y una vez más a finales de 1914-1915. En el Istmo de Tehuantepec los rebeldes dispersos, alejados del centro metropolitano de la nación, alcanzaron sus objetivos expulsando a cientos de terratenientes y compañías norteamericanas. Indisputados, satisficieron sus metas campesinas revolucionarias al restablecer gran parte del sistema de tenencia de tierra porfiriano.

En Morelos, la densa infraestructura de los pueblos campesinos con su herencia precolombina parcialmente intacta, y con sus estructuras sociales y de autoridad, entraron en conflicto con una insistente y poderosa penetración económica de extranjeros, muchos de los cuales se concentraban en la cercana ciudad de México, para crear una situación explosiva. El territorio frágil del estado y el sistema único de transportes y comunicaciones se combinaron con la amplia circulación de ideas revolucionarias del exterior dedicadas a la liberación de los oprimidos para convertirlo en un centro guerrillero de descontento campesino incontrolable.

En el norte, las élites provincianas orientadas al comercio comenzaron a participar activamente en la oposición política por la amenaza económica y política que significó la creciente dominación del gobierno nacional y de Estados Unidos. Para 1902, más del 23 por ciento de todas las inversiones norteamericanas en México estaban concentradas en esos tres estados rurales, Coahuila, Chihuahua y Sonora, cuya población total sólo constituía uno y uno y medio por ciento de la

ciudadanía de la nación. Por todo el país, norteamericanos y otros extranjeros dominaban la industria, los transportes, la minería y la producción maderera y, al poseer 120, 000, 000 de hectáreas altamente capitalizadas, desafiaban a los mexicanos en cuanto a la posesión de tierras. Los norteamericanos eran un grupo importante entre los ganaderos y la nueva élite comercial agrícola. A pesar de sus estrechos vínculos comerciales con inversionistas norteamericanos del otro lado de la frontera, las élites norteamericanas eran muy conscientes de que la hegemonía comercial y terrateniente de Estados Unidos en las zonas afectadas había precedido la pérdida de Texas y, en 1848, del territorio masivo que se convirtió en el suroeste de Estados Unidos.

Las élites norteamericanas, políticamente sofisticadas, habían ejercido un dominio semiautónomo de sus provincias desde los tiempos de la Colonia y habían disfrutado el hecho de encontrarse alejadas geográficamente del gobierno nacional hasta que la tecnología del ferrocarril y del telégrafo del porfiriato las colocó bajo el control de las reglas operativas en la ciudad de México. Mientras tanto, una nueva avalancha de capital norteamericano se apoderó de la mayor parte de los recursos económicos norteamericanos orientando la producción hacia las exportaciones al extranjero. Hicieron esto a expensas de los competidores locales al mismo tiempo que creaban industrias secundarias de apoyo, propiedad de mexicanos. Las protestas de las élites regionales en ascenso se levantaron ante las cada vez más extensas propiedades norteamericanas en todo el país. Esto explotó en una revolución cuando las contracciones financieras en Estados Unidos provocaron una depresión profunda en el norte de México después de 1907.

Los factores que suscitaron la revolución de

1910 estuvieron activos durante la mayor parte del siglo XIX en una escala menor o en un plano regional. Eran: el fracaso del gobierno nacional para satisfacer la exigencia nacionalista pública de enfrentar los retos económicos, políticos y culturales de Estados Unidos y de otras potencias extranjeras; la competencia de la élite regional con un gobierno central en expansión y con la clase dominante metropolitana por el control de los recursos locales; el acceso cada vez más restringido a los contratos para obras públicas y el resentimiento político generalizado de los aliados extranjeros empresariales poderosamente fuertes del gobierno; las crisis fiscales del gobierno nacional provocadas por el aumento de las cargas de interés sobre deudas y la necesidad del desarrollo de la infraestructura; la desilusión de la pequeña burguesía con el gobierno dictatorial y con el poderío y autoritarismo de los caciques; las ideologías revolucionarias importadas; el despojo campesino por la expansión de la agricultura de exportación en un volumen que no guardaba ninguna proporción con la habilidad de la tecnología nueva y del crecimiento económico para absorberlos por medio de nuevo empleo; y la represión y explotación de los campesinos y la clase trabajadora industrial.

Entre 1707 y 1910, el centro de conflicto político, económico y cultural —con excepción de Sonora y Yucatán, en donde la lucha fue casi continua— asumió un esquema general de movimiento del sur hacia el norte. Fue así en respuesta a la tasa de cambio y dislocación social en el campo que empezó con las inversiones europeas en la agricultura tropical para la exportación y terminó con una masiva, aunque tardía, apropiación por los estadounidenses. A lo largo del proceso, los lugares de descontento fueron paralelos al crecimiento de tierras para la exportación ganadera, la minería, los ferrocarriles y la madera

hasta el comienzo de la revolución. Los levantamientos regionales de los siglos XVIII y XIX anticiparon la esencia de la mucho mayor conflagración de 1910.

En el corto plazo —los diez años críticos posteriores a 1900—, las históricamente resistentes clases trabajadoras agrarias e industriales se enfrentaron a la escasez de alimentos, alza de precios, desempleo creciente y empeoramiento de las condiciones de vida. Los campesinos experimentaron nuevos niveles de despojo cuando 31 mil colonos estadounidenses, armados con títulos de propiedad y rifles, ocuparon grandes extensiones de Chihuahua, Coahuila, Puebla, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas y el Istmo de Tehuantepec. Además de los colonos, las compañías estadounidenses compraron grandes extensiones de terrenos en el norte; en Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

La frustrada pequeña burguesía mexicana y las élites locales y provincianas vieron mermada su propia posición social. Simultáneamente el gobierno nacional se vio abrumado políticamente por la invasión económica extranjera y fueron violados sus principios democráticos-federalistas por la dictadura resultante y el autoritarismo de los caciques. Cada vez más se limitaban las posibilidades para el éxito social y económico debido a las erráticas depresiones, endémicas a la economía, con los nuevos competidores extranjeros muchas veces trabajando en cooperación con el gobierno nacional. La posición vulnerable y dependiente de México en la economía mundial provocó un modelo de crecimiento económico controlado especialmente por extranjeros, excesivamente estrecho y desequilibrado, con centros de prosperidad estadounidenses, británicos, belgas, franceses y alemanes protegidos por rurales armados, yuxtapuestos y a menudo combinados

con un despojo de los nativos cada vez mayor.

La revolución comercial e industrial porfirista transformó a los campesinos tradicionales y a los artesanos creando trabajadores agrícolas e industriales. Forjó un ejército de tecnócratas y de administradores, al mismo tiempo que proliferaron los pequeños empresarios. Las élites regionales adquirieron riquezas sin precedentes que provenían de la agricultura comercial y de la minería. Sin embargo, con el paso del tiempo, la inversión extranjera y el cada vez más fuerte gobierno nacional restringían la autonomía de la élite provinciana y compitieron con ella por las oportunidades locales. Durante los primeros diez años del siglo XX elementos de las cuatro clases —campesinos, trabajadores industriales, pequeña burguesía y élites provincianas— abrazaron por separado las doctrinas revolucionarias del anarquismo, el liberalismo o la democracia. Pero, en el contexto de una dominación extranjera de tipo económico, político y cultural y de una crisis cada vez más profunda, las cuatro pudieron reunirse en torno al nacionalismo.

En medio de una inestabilidad socioeconómica generalizada, de una creciente influencia extranjera, disidencia política y crisis fiscal, el gobierno porfiriano perdió gradualmente su habilidad para gobernar. El poder en aumento de las compañías extranjeras acompañado con el costo de la deuda pública, dictó la inhabilidad del régimen para responder a los complejos problemas económicos y políticos que surgieron en los primeros diez años del siglo XX. La relación subordinada-dependiente del régimen con el capital extranjero precipitó una confrontación entre la élite metropolitana y las élites provincianas, dirigidas por Francisco I. Madero, sobre las cuestiones de autonomía regional, un sistema político más abierto y el reparto de oportunidades económicas locales. Con el fin de ganar el apoyo de las

clases bajas para su causa insurreccional, Madero ofreció a los trabajadores industriales el derecho de organizarse libremente y a los campesinos la oportunidad de reclamar las tierras usurpadas.

Como consecuencia de la crisis de las élites, el estado parcialmente paralizado no pudo activar los mecanismos tradicionales de control social con eficacia completa, dando lugar a una conflagración a nivel nacional. Las ideologías revolucionarias extranjeras, el nacionalismo, el liberalismo, el anarquismo y el socialismo ofrecieron a los grupos enajenados tanto explicaciones como soluciones a sus dilemas. Entre 1910 y 1920, las clases rivales se enfrentaron mediante una serie de luchas que sacudieron fuertemente a la nación, amenazaron los intereses de compañías y gobiernos extranjeros, provocaron la intervención extranjera y dieron una forma nueva a la sociedad y al estado.

A corto y largo plazo, las causas de la Revolución Mexicana de 1910 se comparaban con aquellas engendradas por los conflictos multiclasistas contemporáneos en las sociedades tradicionales de China, Irán y Rusia. Las élites de la provincia mexicana, nacionalistas y deseosas de autonomía regional, en combinación con sus aliados de la pequeña burguesía, al igual que sus semejantes en China, Irán y Rusia, encabezaron a los obreros y campesinos en las demandas de una representación gubernamental más efectiva de sus intereses frente a los extranjeros. Vieron aplastadas sus esperanzas al respecto por la abrumadora presencia política y económica extranjera, misma que engarzaba con la política del gobierno nacional. Ante este panorama, no hallaron ninguna vía pacífica para participar en la arena política nacional.

En los cuatro casos se volvió cada vez más obsoleta la restringida base social del gobierno na-

cional, al mismo tiempo que el crecimiento económico creaba nuevos grupos sociales que eran económica y tecnológicamente importantes, pero estaban excluidos de la política. En calidad de sociedades en transición, China, Irán, Rusia y México utilizaban el patrón de plata para crear una moneda que se debilitaba continuamente y una paridad monetaria a la baja para atraer inversión extranjera. Compartieron una dependencia común del apoyo financiero externo para afianzar su industrialización. Inmediatamente antes de sus respectivas revoluciones en los comienzos del siglo XX, cada una de estas naciones experimentó severos traumas socioeconómicos y políticos cuando el apoyo financiero de Europa occidental y Estados Unidos se vio cortado debido a las crisis bancarias entre 1899-1904 y 1907-1908.

La Revolución Mexicana englobaba las mismas fuerzas sociales y grupos que promovieron los primeros levantamientos populares de masas del siglo XX, entre 1905 y 1911, en Irán, Rusia y China. Campesinos, obreros industriales, pequeña burguesía y élites provincianas se movilizaban enfrentándose al gobierno al mismo tiempo que confrontaron las amenazas presentadas por los extranjeros intrusos como los conflictos generados por ellos mismos. En las cuatro revoluciones nacionales de comienzos del siglo XX, los partidos políticos constituidos formalmente poseían muy poca de la fuerza organizativa y de la unidad que había entre los campesinos y trabajadores industriales que caracterizaría las luchas posteriores en Rusia y China. En México, aunque el anarcosindicalismo era fuerte entre los trabajadores industriales revolucionarios e influyó a zapatistas y villistas, no existían cuadros marxistas-leninistas. Como resultado, fueron decisivos la fuerza organizativa y los recursos de la pequeña burguesía, las élites provincianas y sus aliados

extranjeros, reforzados éstos por su proximidad geográfica.

En el transcurso de la revolución surgió una gama de fuerzas contendientes, cada una de las cuales presentó demandas e interpretaciones fundadas en su desarrollo histórico. Los campesinos, los obreros industriales, la pequeña burguesía, las élites regionales, los capitalistas extranjeros y la oligarquía metropolitana porfirista, todos se comportaron de acuerdo a esquemas e intereses establecidos en el siglo XIX y antes. Su experiencia y conducta anteriores al comienzo de la crisis nacional es esencial para comprender la revolución.

Los papeles y la importancia de los varios grupos que hicieron surgir la Revolución Mexicana se comprenden en el transcurso de la lucha misma en el contexto de tres etapas. La primera etapa, la de la crisis de la élite y la movilización masiva, empezó con el surgimiento del Partido Liberal Mexicano y llegó a su clímax con la revuelta del terrateniente-empresario Francisco I. Madero en 1910, etapa que duró hasta 1914. Esta fase consistió en una rivalidad mutuamente destructiva entre las élites dirigentes provincianas y las nacionales por el control del gobierno de la ciudad de México. En el vacío creado por ese enfrentamiento, los campesinos del centro-sur—inquietos y reprimidos de tiempo atrás—pudieron organizar una fuerza armada formidable, los zapatistas, que también desafiaron al gobierno. En 1911, la caída del lejano pueblo fronterizo de Ciudad Juárez desencadenó tumultos masivos en la ciudad de México. Mientras tanto, las innumerables insurrecciones rurales en contra de la propiedad comercial y extranjera llevadas a cabo por campesinos locales, trabajadores agrícolas y mineros de todo el país y la movilización de tropas del ejército estadounidense a lo largo de la frontera, provocaron el exilio intempestivo del asustado presi-



dente sin que se librara una sola batalla verdadera.

Incapaz de controlar las demandas y los actos de los campesinos y trabajadores revolucionarios, Madero no logró reconciliar a la oligarquía resentida ni a los extranjeros con su gobierno incipiente. Durante unos quince meses, Madero trató de gobernar al mismo tiempo que enfrentaba una serie de revueltas en el campo y en las áreas urbanas cada vez más numerosas. En el otoño de 1912 comenzó una ola de asaltos campesinos por

todo el país en contra de las propiedades de extranjeros. Esta continuó durante varios años y llegó a su punto máximo en 1914. Con frecuencia, los ataques los dirigían pequeños propietarios locales y otras personas de prestigio que a menudo se hacían llamar "villistas" y "zapatistas", pero que en realidad estaban fuera de cualquier autoridad organizada. Ante la inquietud generalizada en aumento, Victoriano Huerta, comandante del ejército, derrocó a Madero en 1913. El nuevo régimen, respaldado por la oligarquía y los extranjeros, incluyendo a los estadounidenses que le dieron ayuda de armamento en gran escala, enfrentó una nueva insurrección dirigida por las élites norteñas en Sonora y Coahuila y por dirigentes de las clases bajas en Chihuahua.

La facción constitucionalista —que al final salió victoriosa—, dirigida por el terrateniente y gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y a la que apoyaba una parte de la oligarquía del estado de Sonora, libró una guerra civil en contra de Huerta. Como resultado del control incompleto de la oligarquía norteña, cientos de miles de habitantes de los pueblos, campesinos y trabajadores agrícolas se movilizaron en Chihuahua durante 1913 y 1914 bajo la dirección popular de Francisco Villa. Numerosos grupos que se decían a sí mismos "zapatistas" y "villistas" se insurreccionaron en el campo. Aparecieron "zapatistas" en Tamaulipas, Sinaloa y Sonora. Grupos que se autodefinían como "villistas" llegaron a operar en regiones muy distantes en el sur, como Chiapas, Oaxaca y Campeche. Invariablemente estaban integrados por campesinos locales, mineros, artesanos y rancheros. Algunos operaban a la manera de los bandidos. Otros se apoderaban de las tierras en disputa y ocupaban o destruían las propiedades mineras, rancheras y agrícolas de extranjeros, en especial de los estadounidenses.

Aliados momentáneamente bajo la dirección nominal de Carranza, los grupos revolucionarios norteños más grandes aunque constituidos de manera desigual obtuvieron la crucial declaración de neutralidad estadounidense en el verano de 1913 y el apoyo abierto en el invierno de 1914. La etapa inicial de la revolución, la de la crisis de la élite y movilización masiva, terminó al comienzo del verano de 1914 con la derrota de Huerta. En ese momento, cientos de miles de combatientes se identificaron con dos grupos enfrentados y hostiles que iban consolidándose, mientras que grupos independientes seguían asolando el campo.

La crítica segunda etapa de la revolución, la de la confrontación de clases, la intervención estadounidense y la derrota de los obreros, empezó con una lucha que salió a la superficie a mediados de 1914 entre las fuerzas victoriosas dirigidas por la élite provinciana y la pequeña burguesía, aliados con el carrancismo, y las cohortes rurales populistas de Francisco Villa en el norte, cuyos dirigentes eran en un principio rancheros, artesanos y elementos de las clases populares. Los seguidores de Zapata, principalmente campesinos, y los dirigentes radicales más extremistas de la reforma agraria, como Eulalio Gutiérrez de San Luis Potosí, pronto se unieron a Villa. Durante la guerra civil que siguió, los trabajadores urbanos organizados, la pequeña burguesía, la mayor parte de los intelectuales y, sutilmente, las empresas y el gobierno estadounidense, apoyaron al amplio llamado reformista dirigido a amplios sectores de la población que formularon Alvaro Obregón Salido, el comandante de las fuerzas constitucionalistas, y el presidente Carranza.

La intervención estadounidense en Veracruz de abril de 1914 constituyó el punto focal del esfuerzo del gobierno de Estados Unidos por con-

trolar los acontecimientos en México. Esta empezó con un intento por sacar a Huerta, pero se convirtió rápidamente en un vehículo usado para obtener concesiones de Carranza. Los estadounidenses controlaban ahí un "inmenso" acopio estratégico de armas. El equipo militar incluía más de 4 500 cajas de armamento y ocupaba hasta los techos tres almacenes, cada uno de los cuales medía 57.5 yardas de ancho y de largo y más de 21 pies de alto. Más armas —que incluían ametralladoras y artillería— estaban colocadas en depósitos reforzados que incluían al Baluarte de Veracruz, el faro Benito Juárez y San Juan de Ulúa. Mientras tanto, barcos estadounidenses apoyaron silenciosamente a las fuerzas constitucionalistas sitiadas entrando a los puertos de Mazatlán, Manzanillo, Acapulco, Salina Cruz y Guaymas, manteniendo así el flujo de suministros, pero sin inmiscuirse en las hostilidades.

Las autoridades estadounidenses en Veracruz, encabezadas por el enviado presidencial John Lind y el general del ejército de Estados Unidos, Frederick Funston, también colaboraron en la conservación de "la ley y el orden" en Campeche y Tabasco enviando armas a "la policía y los hacendados" del lugar. Cuatro compañías estadounidenses poseían más de 1,200,000 hectáreas de bosques de maderas preciosas y plantaciones de henequén y de plántulos de caucho, sólo en Campeche. Otra compañía poseía una concesión para explotar 1,400,000 hectáreas de madera en Quintana Roo y Yucatán. Sus propiedades se extendían ininterrumpidamente desde la frontera con Guatemala hasta el Golfo de México en Carmen y de allí hasta la capital del estado. Después de agosto de 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial convirtió el suministro de caucho de Campeche, de suyo material estratégico, en un producto aún más crucial para los intereses del

gobierno de Estados Unidos. Este era a nivel mundial el primer país consumidor de caucho natural.

La alianza entre el constitucionalismo —dirigido por la élite de provincia y la pequeña burguesía— y los trabajadores industriales recibió una ayuda crucial en forma de municiones estadounidenses que se importaron libremente y las cantidades masivas de armas almacenadas en Veracruz. Equipados con artillería moderna, ametralladoras, camiones, radio-transmisores y rifles, las fuerzas del constitucionalismo lograron derrotar rápidamente las principales fuerzas villistas y zapatistas más numerosas, dirigidas casi siempre por líderes de la clase trabajadora rural. A mediados de 1915, lograron el dominio estratégico de villistas y zapatistas, aunque la lucha siguió durante otros cinco años.

La segunda etapa de la revolución siguió cuando la clase trabajadora urbana y la burguesía volviéronse la una contra la otra a mediados de 1915, después de la derrota militar de los villistas en el Bajío y en la parte norte-centro de México. El gobierno constitucionalista, respaldado por compañías extranjeras y los empresarios más importantes de la ciudad de México, se opuso violentamente a los planes de la principal organización de trabajadores industriales, la Casa del Obrero Mundial.

La Casa planeaba apoderarse de las empresas privadas de México y reorganizarlas en un sistema anarcosindicalista. El gobierno rechazó las demandas de los trabajadores urbanos que pedían mejores salarios, la eliminación del pago en vales por parte de empresarios privados y el control de precios para frenar la inflación y para resolver el problema del masivo desempleo. Huelgas cada vez más militantes y a mayor escala, manifestaciones masivas y tumultos callejeros siguieron

durante quince meses. Las fábricas cerraban mientras que trabajadores armados mantenían barricadas y la multitud enardecida salía a las calles. El descontento terminó en agosto de 1916, cuando las tropas del ejército aplastaron violentamente la segunda huelga general del año, destruyeron los diferentes centros de la Casa localizados en varias ciudades del país y, con ellos, el poder del movimiento obrero urbano revolucionario.

Durante la etapa final de la revolución, entre 1916 y 1924, una nueva élite, dedicada a la consolidación del estado, reorganizó al gobierno de México. Sus luchas por el poder estuvieron caracterizadas por un menor derramamiento de sangre. El ejército, dirigido básicamente por la pequeña burguesía y la oligarquía sonorenses, apoyó a Alvaro Obregón Salido y a Plutarco Elías Calles contra la alianza de Carranza cuya base se había reducido a la élite de Coahuila y del noreste, y a los burócratas del gobierno y partidarios empresarios. La síntesis resultante en el gobierno previno cambios violentos de poder. El proceso comenzó con la derrota de los trabajadores en agosto de 1916, incluyó la promulgación de una constitución corporativista y nacionalista en 1917, la pacificación de casi todas las innumerables insurgencias rurales y terminó con exitoso golpe de estado bonapartista llevado a cabo por Obregón Salido en 1920. Los soldados mataron al presidente Carranza cuando huía de la capital hacia Veracruz.

Durante el periodo 1916-1924, disminuyó el nivel de violencia al mismo tiempo que terminaba —en sus rasgos esenciales— la reestructuración política de la sociedad y la reorganización de la élite. Los elementos desmoralizados de los derrotados movimientos villista, zapatista y de trabajadores urbanos industriales, se unieron a los grupos pacificados del régimen porfirista en un orden

nuevo dominado por el victorioso liderazgo militar. Los dirigentes empezaron a traducir su poder militar en dominio económico y civil. Mientras que los pequeños empresarios y el gobierno estadounidense observaban y se preparaban para negociar, los triunfadores pequeño-burgueses elaboraron una nueva y sofisticada base para el control social en la forma de su constitución liberal, nacionalista y unificadora de 1917.

Resultado de la revolución fueron los notables adelantos que obtuvieron las masas, eliminando la mayor parte de los vestigios de las castas y las relaciones sociales arcaicas que aún vejan a gran parte de América Latina, y abriendo a la sociedad hacia la educación pública y la movilidad individual. Un nacionalismo resurgente expulsó a los extranjeros, conservando la integridad territorial y la soberanía mexicana. La estructura organizativa y los métodos de funcionamiento gubernamental que surgieron entre 1916 y 1924, establecieron un orden operativo que se convirtió en la base para gobernar durante los 60 años que siguieron.

En las décadas de los veinte y treinta, el gobierno aisló y cooptó violentamente a los grupos disidentes agrarios, laborales, militares, empresariales y de la iglesia. Eliminadas sus tendencias revolucionarias y contestatarias, los grupos derrotados se unieron a la nueva jerarquía como elementos subordinados. Mientras tanto, el estado llegó a una serie de arreglos con las compañías y el gobierno estadounidenses. El resultado de este modo de operar durante los últimos cuarenta años ha sido un orden sociopolítico sólidamente arraigado con una base amplia. El nuevo régimen, en conjunción con el crecimiento acelerado de la economía capitalista, le ha entregado el poder a la burguesía emergente y ha dejado a las clases trabajadoras mexicanas en deplorables condiciones económicas.

